



Sr. D. Vicente Soler i Marco
Consejero de Hacienda y Modelo Económico
Comunidad Valenciana

Madrid, a 28 de julio de 2016

Estimado Consejero,

El pasado 6 de abril se remitió comunicación por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual, se activaban para la comunidad las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativas a la aprobación de la no disponibilidad de créditos y a la retención de los mismos que garantizara el cumplimiento del objetivo establecido.

En el Plan de ajuste que se acordó con la comunidad para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016 se concretaron dichos acuerdos de no disponibilidad, así como el conjunto de medidas y escenarios relativos a la evolución financiera del ejercicio 2016 compatibles con el objetivo de estabilidad del -0,7% incorporado en el Programa de Estabilidad comunicado a las instituciones europeas.

En todo caso, resulta imprescindible llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento del plan de ajuste acordado así como velar por la correcta aplicación y suficiencia de los acuerdos de no disponibilidad adoptados en cumplimiento del citado artículo 25 de la LOEPSF. A este respecto, y de acuerdo con los últimos datos disponibles en relación a la ejecución presupuestaria de tu comunidad observamos con preocupación la existencia de posibles riesgos y desviaciones en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del presente ejercicio, tal y como hemos tenido ocasión de analizar en la videoconferencia que hemos mantenido esta misma semana, y por ende del escenario contemplado en el plan de ajuste.

Dichos riesgos se concentran fundamentalmente, por un lado, en el comportamiento que finalmente pueden registrar a fin de ejercicio los ingresos previstos por transferencias corrientes y de capital, y especialmente, atendiendo a su evolución actual, en el capítulo de gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios. Sin perjuicio de lo anterior, en



la citada videoconferencia hemos tenido ocasión de recibir vuestras impresiones sobre varios aspectos y especialmente en relación a las buenas perspectivas de las actuaciones acometidas para la mejora de eficiencia en el ámbito sanitario.

En todo caso, esta apreciación sobre la existencia de riesgos y desviaciones se contempla igualmente en el informe anual elaborado por la AIReF sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública así como sobre la regla de gasto del ejercicio en curso al que se refiere el artículo 17 de la Ley 6/2013 de 14 de noviembre, de creación de la AIRef.

Atendiendo al momento del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos resulta de especial trascendencia la activación de las medidas necesarias para procurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, del plan de ajuste y de los efectos de las medidas coercitivas aplicadas. A modo de ejemplo, y con el fin de procurar el adecuado cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, el Estado, adicionalmente a la instrumentación de un Acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros, ha procedido a adelantar al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

A este respecto, la Comunidad deberá comunicar y concretar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e incorporar a su plan de ajuste, las medidas adicionales que va a adoptar que permitan corregir cualquier posible desviación del cumplimiento del objetivo de estabilidad.

En cualquier caso, y con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, se requiere la remisión de información específica antes del próximo 5 de septiembre sobre las siguientes cuestiones:

- Líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista por la comunidad, con referencia a la fecha prevista de publicación y a los plazos límite en la asunción de compromisos de gasto adicionales, remitiendo información sobre los efectos estimados de dicha orden y la evaluación mensual de dichos efectos desde su adopción, conforme al modelo A24 disponible en el envío de los cuestionarios de la plataforma CIMCA.
- En la medida en que el artículo 25 de la LOEPSF anteriormente citado establece limitaciones al incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto dicha información será objeto de un seguimiento específico, se deberá remitir los informes a los que se refiere el artículo 10 y 12 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, así como la información adicional



que a estos efectos se solicite específicamente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

- Sin perjuicio de la información disponible en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y de la que ya se viene suministrando mensualmente de ejecución en la aplicación CIMCA, resulta conveniente la remisión de un informe específico por la comunidad a nivel de los distintos fondos europeos, en relación con las previsiones actualizadas para 2016 y los riesgos asociados sobre el comportamiento de los ingresos asociados a fondos de la UE, los gastos asociados a los mismos por capítulos, y su previsible impacto en términos de estabilidad presupuestaria, desglosando su efecto en términos de ejecución presupuestaria y en términos del ajuste derivado de la metodología aplicable de cuentas nacionales.
- Relación de las actuaciones y medidas adoptadas o previstas en relación al control de los gastos de personal y especialmente del gasto corriente en bienes y servicios, concretando en su caso las medidas adoptadas de mejora de la eficiencia, a fin de procurar el cumplimiento de las previsiones del plan de ajuste, o en su defecto las actuaciones adicionales a acometer para compensar eventuales desviaciones.

Por último, quiero trasladarte la importancia en la adopción de las decisiones necesarias que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos a este respecto, así como las implicaciones que su incumplimiento determina para cada una de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de responsabilidad regulado en el artículo 8 de la LOEPSF, conforme al cual cada Administración Pública asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales, y que ha sido objeto de desarrollo conforme a lo previsto en el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la información indicada, con el convencimiento de que la comunidad llevará a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio corriente.

Atentamente,

Antonio Beteta Barreda